

PROGRAMA DE APOYO A LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

1. Introducción

Altamente preocupada por el incremento de la violencia en el Municipio, la alcaldía de Santiago de Cali definió en su plan de desarrollo (2001-2003) una estrategia global para la convivencia ciudadana y el fortalecimiento del tejido social. El 6 de julio de 1998, el municipio de Santiago de Cali suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el contrato de préstamo No.: 1087/OC-CO, cuyo propósito fundamental es la disminución de la violencia y la inseguridad en la ciudad.

Este documento contiene una propuesta de intervención para el desarrollo de los “Distritos de Paz y Convivencia; Escenarios para la Concertación y la Participación”.

2. Deterioro social y la violencia en Colombia

La violencia en América Latina constiuye hoy en día una tragedia humana de grandes proporciones. No sólo se violan los derechos fundamentales de las personas, sino que tienen un enorme costo social. La tasa regional de homicidios -alrededor de 20 por 100.000 habitantes- hace de Latinoamérica y el Caribe una de las regiones más violentas del mundo (Ayres, 1998).

Con una democracia antigua, rica en recursos naturales y humanos, Colombia está sufriendo graves pérdidas de capital humano, físico, social y natural a causa de la violencia. Las tasas de homicidio por 100.000 habitantes, entre los inicios de los ochenta y comienzos de los noventa, pasó de 20,5 a 89,5, respectivamente (Ayres, 1998), una cifra escalofriante en comparación con el promedio arriba mencionado para América Latina y el Caribe. La negatividad de la sociedad colombiana, la pérdida de la credibilidad en las instituciones, la desconfianza interpersonal y el aislamiento del ciudadano por la carencia de seguridad social, vinculación legislativa, solidaridad, encuentros sociales con amigos del trabajo y vecinos han sido puestos de relieve por Sudarsky (1997) en un estudio de ámbito nacional solicitado por el Departamento de Planeación Nacional de Colombia para incluir el país en la Encuesta Mundial sobre Valores (1995-1998). No deja de sorprender que en Colombia se hayan alcanzado -en las últimas décadas- mejoras en sus indicadores económicos y sociales en un contexto en el que la criminalidad y la violencia en ciudades y campos muestran niveles cada vez mas altos (Solimano et al., 1999). La Organización Panamericana de la Salud afirma:

“El principal problema de salud pública de la población colombiana son las lesiones debidas a causas externas, resultantes de la violencia que afecta toda la sociedad...la tasa de lesiones no fatales en 1995, en comparación con el año anterior, refleja el incremento en la violencia pública, la violencia familiar, los delitos sexuales, los accidentes de tránsito y otro tipo de accidentes”. Igualmente reporta que en Colombia “se estiman, para 1995, un total de 1.450.845 años de vida potencial perdidos (AVPP) debido a muertes violentas, 67,4% (977.725) debido a homicidios...” (PAHO, 1998, p.185).

El Banco Mundial identifica la violencia y el conflicto armado como las principales causas que impiden un mayor desarrollo económico y social en Colombia (Solimano et al., 1999). La nación pierde alrededor de un 4 por ciento de su PNB cada año, como parte del costo humano de los homicidios (Burki, Aiyer y Hommes, 1998). Rubio (1996) estima que la pérdida de crecimiento económico a causa de la violencia es tan alta, que Colombia hubiera tenido en 1996 un ingreso

per cápita un 32 por ciento más alto del registrado. Se calcula que un 25 por ciento de la carga en salud en el país es debida a lesiones intencionales siendo el promedio en América Latina del 3 por ciento (Ministerio de Salud de Colombia, 1995). Los costos del cuidado médico asociado a lesiones intencionales pueden alcanzar cerca de un 0,76 por ciento del PIB (CISALVA, 1998).

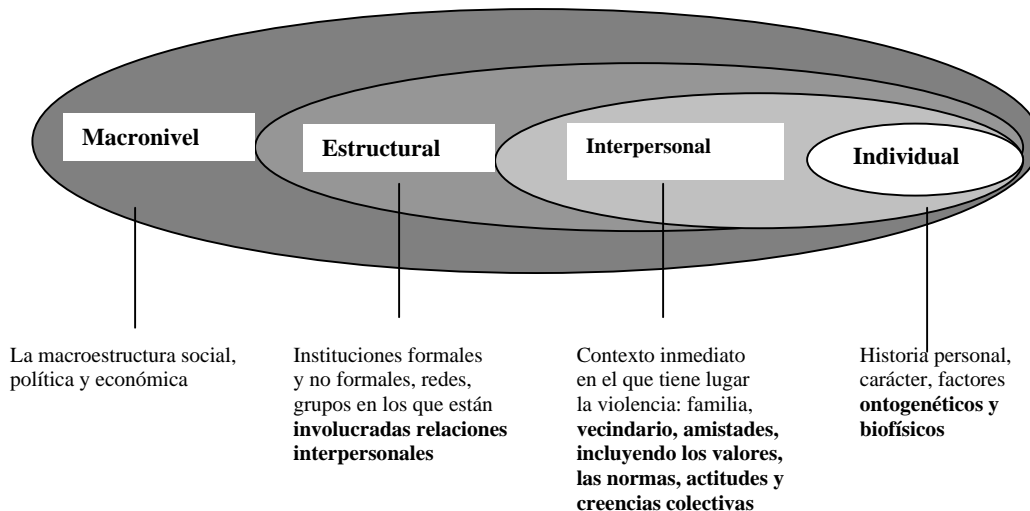
3. La juventud: una población en alto riesgo

La OMS clasifica la población joven de acuerdo a tres grupos de edad: adolescencia temprana (10-14 años), tardía (15-19) y adulto joven (20-25). Para 1996, se estimaba la población total de adolescentes y jóvenes en América Latina y el Caribe en 148 millones de personas, que representaba un 30 por ciento de la población total de la región (OMS, 1998). Weaver y Maddaleno (1999) sintetizan de forma dramática la situación del joven en América Latina y el Caribe. El proceso demográfico de urbanización acelerada, los asentamientos urbano-marginales, el desempleo, la ausencia de escolaridad, los bajos niveles de aseguramiento en salud están afectando gravemente el bienestar de esta población en 21 países de las Américas. Las tasas más altas de homicidios se dan en jóvenes de 15 a 24 años. Uno de cada cinco jóvenes entre 16 y 18 años ha sufrido maltrato físico, uno de cada ocho abusos sexuales, el 18 por ciento del total de suicidios se atribuyen a personas entre 15 y 24 años. Se estima en alrededor de 10 billones de dólares anuales, el costo económico de la muerte y discapacidad generada por la violencia en este grupo de la población. (Weaver y Maddaleno, 1999).

La marginalización social de los jóvenes en Colombia se refleja en tasas extremadamente altas de asesinatos en el grupo etéreo de 15 a 24 años (alrededor del 35 por ciento de la población total). **Se registran cifras de 267 homicidios por 100 mil habitantes** (Weaver y Madaleno, 1999) y existen grandes diferencias entre las distintas ciudades y entre los mismos barrios (Gaitán y Díaz, 1994). Se trata de diferencias que revelan que los niveles de pobreza no están explicando suficientemente el problema. Gran parte de las investigaciones sobre la violencia en jóvenes hacen referencia a las víctimas y a los efectos que ésta produce sobre ellas. Existen también diversidad de estudios que centran su atención sobre las causas o factores predictores de la violencia en jóvenes: la violencia infantil y el abuso de los niños (Lewis et al., 1987; Pinheiro, 1993), la pobreza y la marginalidad (Gutiérrez, 1978), la exposición a hechos violentos en los medios de comunicación (Wood, Wong y Chachere, 1991). Las relaciones entre la familia y la violencia juvenil ya han sido establecidas (Moser y van Bronkhorst, 1999).

4. Un marco conceptual para la reducción de la violencia desde la perspectiva del capital social

Un reciente e interesante marco de análisis para la reducción de la violencia en el contexto colombiano es planteado por Moser y Shrader (1999). Ellas consideran la violencia como un fenómeno social complejo y multifacético, cuyas causas y consecuencias están estrechamente relacionadas. Distinguen tres grandes categorías de violencia: **la política, la económica y la social**, cada una definida en términos del tipo de poder que se desea obtener o conservar, conciente o inconscientemente, a través de medios coercitivos, del uso de la fuerza o de la imposición arbitraria. Añaden además cuatro niveles diferentes de causalidad:



Adaptado de: Moser y van Bronkhorst, 1999

Este marco teórico reconoce varios niveles de causalidad, desde la violencia de un nivel macro o estatal a los factores personales que inducen al comportamiento violento. Algunos salubristas han propuesto aproximaciones similares a las de las antropólogas Moser y Shrader como Cohen y Swift (1993) que sugieren un enfoque que incluye:

***El capital social** es un concepto relativamente reciente que se origina en el campo de las ciencias políticas y la sociología para explicar las habilidades, formas y capacidades de los ciudadanos de una comunidad para establecer vínculos entre sí y resolver en beneficio mutuo y más efectivamente problemas que los afectan. El capital social se define como una dimensión colectiva de la sociedad (una dimensión ecológica), externa al ciudadano, como un aspecto de la estructura social y no de los individuos. Fundamentado en elementos de confianza, reciprocidad y normas de ayuda mutua que actúan como un recurso para promover el intercambio de las personas, disminuir los costos de transacción y facilitar la acción colectiva (Kimberly, Kawachi y Kennedy, 1999). Cada vez hay mayor interés en los investigadores de la salud pública en torno a este constructo. En un artículo acerca de las implicaciones que el capital social tiene para la epidemiología y la salud pública, Lomas afirma:*

“Es indudable el desequilibrio en los esfuerzos tanto de la salud pública como de la epidemiología. Por una parte, se destinan millones de dólares a mejorar el nivel de salud a través de intervenciones individuales, mientras que, por la otra, ignoramos lo que nuestra experiencia diaria nos muestra, es decir, que la forma como organizamos la sociedad, el grado en el que promovemos la interacción entre los ciudadanos y el punto hasta el que confiamos y nos asociamos con los demás en comunidades solícitas son probablemente los determinantes más importantes para nuestra salud.” (Lomas, 1998, Pág. 1181).

Para explicar los distintos niveles de violencia en 28 departamentos de Colombia, Londoño (1998) utiliza los datos de la Encuesta de Salud Mental del Ministerio de Salud de 1993. Y logra determinar un 65 por ciento de la varianza con sólo dos variables: la intensidad de capital social (familiar y comunitario) y la velocidad del progreso de la educación. Las variables de pobreza y nivel de escolaridad no tuvieron un efecto. Concluye Londoño: “La incidencia de la violencia es

mayor en aquellos departamentos del país con mayor ingreso, con menor progreso educativo, y sobre todo con menor cohesión social entre sus gentes”.

5. El contexto económico y social

La ciudad de Cali, centro de la segunda área metropolitana del país, ha sido tradicionalmente considerada como una de las de mayor desarrollo y nivel de vida. Sin embargo, a partir de 1996 entró en la más compleja fase de crisis económica, de orden público, social e institucional de su historia. Esta crisis fue el resultado de la recesión económica, que tuvo sus inicios ese mismo año y que se ha prolongado, prácticamente, hasta el presente. El tejido productivo de la ciudad y de la región se ha debilitado en forma dramática en los últimos seis años: la economía cafetera, la agricultura comercial, la industria y la construcción han decrecido en términos reales, perdiéndose miles de fuentes de empleo. Este deterioro ha sido producido por diferentes factores, entre los cuales se destacan los siguientes: el impacto de fenómenos como la apertura y el contrabando; las consecuencias de la lucha contra el cartel de Cali y el narcotráfico a partir de 1995, definida como el ajuste ético de la economía; además, a partir de 1998 la economía metropolitana recibió el coletazo recesivo de la economía nacional en su conjunto. También la ciudad y la región se vieron afectadas por el recrudecimiento del conflicto armado con hechos que golpearon el corazón de los caleños, tales como los del secuestro masivo de La María, en 1999, posteriormente los del kilómetro 18 y -este año- el secuestro de los diputados de la Asamblea Departamental, en pleno centro de la ciudad, además de diferentes actos de terrorismo que han afectado la tranquilidad ciudadana.

En lo concerniente a las situaciones de pobreza, en el año de 1995, de las tres ciudades de mayor desarrollo del país, Cali era la que tenía la mayor proporción de personas con NBI: el 20.3 por ciento contra el 13.4 por ciento de Medellín.¹ Según los cálculos de la Encuesta Nacional de Hogares,² basados en los indicadores de línea de pobreza y línea de indigencia, de Cali ha presentado entre los años 1994 y 1998, la tercera población por debajo de la línea de pobreza y la cuarta de indigencia de las cinco áreas metropolitanas del país³. Así, mientras en 1994 existían 571.285 hogares en condiciones de pobreza (LP), en 1998 el número de hogares se incrementó a 807.430 hogares. En lo concerniente a indigencia se encuentra que de 101.604 hogares en indigencia (LI) se pasó en 1998 a 207.033 hogares. Finalmente, en términos de ingreso familiar promedio en el municipio, éste pasó de 1.7 salarios mínimos en 1994 a 1.4 en diciembre de 1997⁴. Se observa por lo tanto, un deterioro preocupante de la calidad de vida de los hogares y de los habitantes de Cali.

¹ Cifras DANE, Encuesta de Hogares.

² Se debe tener en cuenta que la información suministrada por la ENH hace referencia al área metropolitana Cali – Yumbo.

³ Fernando Urrea, Carlos Ortiz, Patrones Sociodemográficos, pobreza y mercado laboral en Cali, Informe para el Banco Mundial, Cali, 1999.

⁴ Según datos de Planeación Municipal.

6. Los distritos de paz y convivencia

El concepto central de la política municipal es poner en marcha la noción de Distrito de Paz. Se trata de un conjunto de comunas, que puedan ser objeto de la intervención gubernamental para desarrollar procesos sociales y políticos que generen las condiciones subjetivas y objetivas para la convivencia pacífica. La figura del distrito es, entonces, una herramienta para concertar acciones en zonas relativamente homogéneas desde el punto de vista social y territorial y, por tanto, exigirían acciones coordinadas de parte de los entes gubernamentales y no gubernamentales con el fin de obtener impactos mayores en el tiempo y en el espacio, y hacer un uso más eficiente de los pocos recursos públicos.

La noción se entiende como una **demarcación administrativa** para efectos de la oferta pública de políticas, programas y proyectos que promuevan y consoliden formas de convivencia pacífica en un territorio determinado. Asimismo, se trata de una **unidad socio-territorial**, es decir, como un territorio relativamente homogéneo desde el punto de vista de su composición social, de las dinámicas económicas, culturales y políticas que en él ocurren y de la configuración (socio-cultural) del territorio aludido.

Se entiende la **convivencia** como el conjunto de mecanismos, instituciones, normas, símbolos e imaginarios colectivos con que las personas, grupos sociales y las organizaciones cuentan para resolver civilizadamente⁵ las diferencias, conflictos o asuntos que los colocan en situaciones de confrontación de intereses u opiniones, y mediante los cuales se buscan salidas satisfactorias. Según este enfoque, la **seguridad ciudadana** no se basa en la aplicación de la capacidad de coacción, de la intimidación o de la penalización por parte del Estado sobre el resto de la sociedad sino que se fundamenta -cada vez más- en el perfeccionamiento de una cultura de convivencia ciudadana inspirada en la solidaridad, el respeto a las diferencias en un ámbito igualitario en el que se expresen criterios, postulados y principios de la justicia distributiva.

Por **política pública** asumimos el conjunto de propósitos, medios e instrumentos definidos que orientan la acción del Estado hacia la búsqueda y construcción colectiva del bienestar sobre la base de criterios de inclusión social, equidad y expansión de ciudadanía. Se trata, entonces, de una política pública orientada a la consecución del máximo de bienestar posible para los grupos en mayor desventaja social.

7. Objetivo general

Consiste en desarrollar una experiencia de intervención social e institucional, intersectorial social y focalizada en tres escenarios de la ciudad, orientada a generar alianzas estratégicas entre el sector público, privado y comunitario que movilice acciones concertadas hacia la promoción de la convivencia, la seguridad y la paz.

⁵ Civilizadamente significa que el manejo del conflicto de intereses conduce a la permanencia de los actores en el escenario de relaciones bajo reglas de juego y metas colectivas acordadas mutuamente. Esto contrasta abiertamente con el modelo hobbesiano de estado de naturaleza ("el hombre es lobo para el hombre") e incluso con el mismo modelo de contrato social (autoridad absoluta que resuelve el conflicto entre las partes).

8. Fases o momentos en la estrategia

El desarrollo de la estrategia plantea cuatro momentos basados en la acción concertada, planificada de manera colectiva que da lugar a pensar y renovar las prácticas en las instituciones estatales, no estatales y en la comunidad.

Reconocimiento: proceso de diálogo y escucha con la participación activa de los agentes institucionales y comunitarios.

Diseño: consulta, decisión, planificación y gestión, que requiere de la construcción de consensos sobre los sentidos y acciones que se quieren implementar.

Ejecución: implementación de las diferentes acciones planificadas con la participación en distintos niveles de los actores involucrados, de acuerdo con lo concertado en el momento del diseño.

Evaluación: propiciar espacios colectivos de racionalización de la experiencia con relación a sus logros, dificultades y proyecciones de modo de generar aprendizajes sobre los dispositivos y las dinámicas sociales agenciadas, con énfasis en la replicabilidad y sostenibilidad de los procesos.

9. Áreas de intervención priorizadas

Para efectos del área de intervención de estos programas, en primer lugar se priorizarán las comunidades populares de estratos uno, dos y tres. En segundo lugar, se tendrán como referencia áreas y sectores sociales, populares y medios, como los grupos de economía informal, el sector educativo, la población juvenil y de mujeres, así como, los trabajadores de la cultura y los gestores de procesos comunitarios urbanos.

Las áreas de intervención en las que se concentra el modelo de **DISTRITOS DE PAZ Y CONVIVENCIA** son las siguientes:

Subsistema de juventud:

Comprende el financiamiento de acciones como la atención de menores y jóvenes a través de la oferta de oportunidades de estudio, recreación, capacitación y empleo y otras orientadas a facilitar el proceso de reinserción y rehabilitación de jóvenes infractores y en alto riesgo.

Inversión: US \$ 2.500,000.00

Subsistema de familia:

Financiamiento de procesos orientados al fortalecimiento de las redes de promoción del buen trato y la prevención de la violencia intrafamiliar, en coordinación con las secretarías de gobierno, salud, educación e institutos nacionales como el ICBF. Se hace énfasis en la formación de liderazgos afectivos que desarrollan mujeres cabezas de hogar en estas zonas de Santiago de Cali.

Inversión: US \$ 500,000.00

Subsistema de justicia:

Comprende el financiamiento de actividades orientadas a fortalecer y apoyar mecanismos de mejoramiento de la operación y administración de justicia y seguridad ciudadana a través de la creación o fortalecimiento de:

Las instancias municipales donde los ciudadanos ponen o inician sus quejas o querellas –institucionales que forman parte de las secretarías de gobierno municipal y que en Colombia se conocen como inspecciones de policía, Comisarías de familia, apoyo a redes contra la violencia doméstica, Centros de conciliación y mediación de conflictos, Consultorios jurídicos con la participación de universidades, consolidación en zonas marginales de “Casas de justicia”, centros especializados en el tratamiento de víctimas y en la atención al ciudadano donde además de las entidades mencionadas anteriormente se agrupan y coordinen acciones de fiscalía, defensores del pueblo y medicina legal:

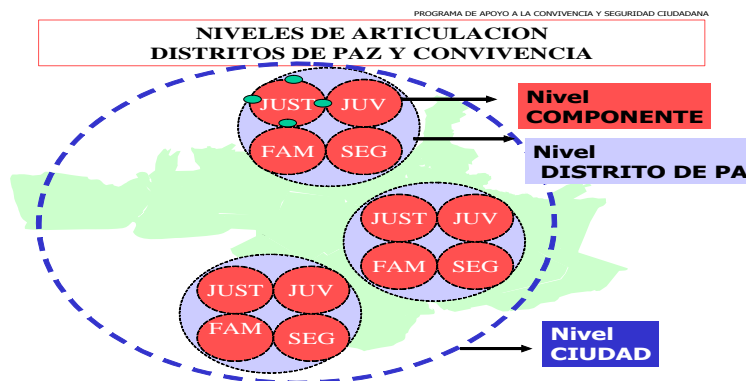
Inversión: US \$ 1,500,000.00

Subsistema de seguridad ciudadana:

Se financian programas comunitarios de vigilancia y prevención denominado “Vecinos y Amigos” con énfasis en Alarmas de prevención en los Barrios y formación a los vigilantes de cuadra como promotores de convivencia, Se complementan estos procesos con dos elementos:

- Mejoramiento de las comunicaciones entre la comunidad y la policía.
- Cualificación del talento humano de la Policía Comunitaria

Inversión: US \$ 500,000.00





10. Descripción de estrategias.

10.1 Estrategia metodológica

Esta centrada en los siguientes elementos:

- **Información:** desde la presentación de la propuesta de intervención hasta la socialización de las diferentes actividades. Se espera mantener contacto permanente con los ciudadanos/as, las instituciones y las organizaciones de las comunas y del municipio en general.
- **Consulta:** como parte de la necesidad de generar confianza con la propuesta y construir de manera colectiva escenarios de viabilidad y sostenibilidad.
- **Fiscalización:** la ejecución del proyecto en sí mismo será un laboratorio de gestión transparente y colectiva. De este modo, si los actores sociales, institucionales, y comunitarios lo quieren, podrán desarrollar acciones de control ciudadano en la óptica de contribuir al mejoramiento de la gestión del proyecto.
- **Concertación:** Con el fin de garantizar la viabilidad, legitimidad y sostenibilidad de la propuesta es necesario adelantar un proceso de concertación de la estrategia con los diversos actores. Dicho proceso será viable sobre la base de la posibilidad de generar espacios de encuentro constante entre los actores claves de éste.

10.2 La estrategia de la intervención

En el siguiente esquema podemos apreciar de manera global los componentes que se integran en el modelo de Distritos de Paz y Convivencia:



Las instituciones públicas en los Distritos de Paz y Convivencia fortalecen relaciones, vínculos y consolidan sus capacidades para enfrentar la violencia.

Se consolida y fortalece una oferta específica de servicios sociales para reducir los niveles de violencia en los Distritos de Paz y Convivencia.

Las iniciativas comunitarias de los Distritos de Paz y Convivencia logran colectivamente desarrollar estrategias eficaces para nuevos escenarios de convivencia.

Los Distritos de Paz y Convivencia son una alternativa política y estratégica para el desarrollo de la convivencia, la Seguridad Ciudadana y la Paz en el Municipio de Cali.

Proyectos de ciudad

El programa tiene un nivel de articulación global de Ciudad a partir de elementos que involucran diversos actores del Estado, como de la Sociedad Civil:

Sistemas de información:

El Observatorio Social y el Centro Automático de Despacho son los dos proyectos que concentran toda la información de la Ciudad para la toma de decisiones relacionadas con las políticas públicas de Convivencia y Seguridad.

Inversión: US \$ 2,500,000.00

Cultura ciudadana y espacio público:

Se financian proyectos orientados hacia:

El fortalecimiento de una cultura ciudadana democrática, incluyente, pacífica y centrada en la participación, la solidaridad y el sentido de pertenencia. Se hace énfasis en campañas en los medios masivos de comunicación, Red de Medios para la Convivencia, concertación con los gremios y expresiones culturales populares.

La recuperación social del espacio público, con énfasis en el fomento de actividades recreativas, lúdicas y culturales, denominadas “GESTOS” que involucran un número significativo de jóvenes de educación media que realizan su servicio social, hombres y mujeres, como ALFABETIZADORES CIVICOS CALLEJEROS.

Inversión: US \$ 1,500,000.00

Fortalecimiento institucional:

Tiene por objetivo brindar apoyo institucional y mejoramiento tecnológico a la Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad que es la dependencia municipal que tienen a su cargo la responsabilidad de diseñar las políticas y ejecutar programas de seguridad y convivencia entre las diferentes dependencias de la administración municipal.

Inversión: US \$ 1,500,000.00



10.3 Estrategia de comunicaciones

El enfoque de comunicación será trabajado desde la perspectiva del desarrollo social, que se caracteriza por asumir la realidad como una construcción social de sentidos que involucra al sujeto como entidad dinámica y con capacidad de acción y transformación social, e involucra la dimensión de las necesidades a partir de las especificidades de la realidad micro y su relación con la globalidad.

10.4 Estrategia de seguimiento y evaluación

La evaluación contiene entonces los siguientes componentes:

Elementos de proceso: Se refieren a las actividades y al conjunto de métodos, instrumentos y esquemas operativos necesarios para ponerlas en marcha, a través de los cuales se busca llenar los objetivos de un programa.

Elementos de producto: Aluden a los logros (resultados) obtenidos en desarrollo de las actividades del programa.

Elementos de impacto: Tienen que ver con el efecto de los productos sobre la población-objetivo⁶, en términos de las metas de cambio esperadas como consecuencia de la intervención.

El seguimiento y la evaluación buscan medir y entender el grado de *eficiencia* en el uso de los recursos disponibles⁷, generalmente escasos, la *eficacia* de la acción realizada, entendida como el logro de metas preestablecidas, y la *efectividad*, es decir, la capacidad del programa para generar cambios en el universo intervenido y conseguir sus objetivos.

Este ejercicio es una construcción colectiva en la que han participado Organizaciones No Gubernamentales, La Administración Municipal de Santiago de Cali y Organizaciones Comunitarias.

⁶ Por población-objetivo entendemos las contrapartes de un programa, las cuales pueden actuar como cogestores del mismo.

⁷ Los recursos aluden al conjunto de medios (económicos, humanos, tecnológicos, organizativos, institucionales y de información) de que disponen los agentes ejecutores de un programa para llevarlo a feliz término.

Bibliografía citada

American Educational Research Association, American Psychological Associations y the National Council on Measurement in Education. 1999. Standards for Educational and Psychological Testing. Publicado por American Educational Research Association.

Ayres, R.L. 1998. Crime and Violence as Development Issues in Latin America and the Caribbean. World Bank Latin American and Caribbean Studies, Viewpoints. Washington, D.C.

Baum, F.E. 1999. Social Capital: Is it good for your Health? Issues for a Public Health Agenda. Epidemiological Community Health 53:195-196.

Burki, S.J.; Aiyer, S.Y. y Hommes, R. 1998. (eds.), Poverty and Inequality: Annual World Bank Conference on Development in Latin America and the Caribbean, 1996 proceedings, Banco Mundial, Washington, D.C.

CISALVA. 1998. Dimensionamiento de la Violencia en Colombia. Documentos de trabajo de la red de Centros. Banco Interamericano de Desarrollo. Series de Trabajo R-339.

Cohen, L. y Swift, S. 1993. A Public Health Approach to the Violence Epidemic in the United States. Environment and Urbanization 5(2):50-66.

Gaitán Daza, F. y Díaz Moreno, J. 1994. La Violencia Colombiana: Algunos Elementos Explicativos”. In Carrión, F., Concha, A. Y Cobo, G. (eds.) *Ciudad y Violencia en América Latina*. Programa de Gestión Urbana Vol.2 - PGU, Oficina Regional Para América Latina y el Caribe.

Gutiérrez, V. 1978. El gamín: Su Albergue Social y su Familia. UNICEF, Bogotá, D.E.

Hawe, P. y Shiell, A. 2000. Social Capital and Health Promotion: A Review. Social Science & Medicine 51:871-885.

House J.S., Landis K.R. y Umberson, D. 1988. Social Relationships and Health. Science 214: 540-545.

Huesmann, L.R. y Guerra, N.G. 1997. Children's Normative Beliefs about Aggression and Aggressive Behavior. *Journal of Personality and Social Psychology* 72(2):408-419.

Jeaneret, O. y Sand, O. 1993. Intentional Violence among Adolescents and Young Adults: An Epidemiological Perspective. *World Health Statistics Quarterly*.

Kawachi, I. y Kennedy, B.P. 1997. Health and Social Cohesion. Why Care about Income Inequality? BMJ 314:1037-1040.

Kawachi, I., Kennedy, B.P. y Lochner, K. 1997. Long Live Community. Social Capital as Public Health. The American Prospect 55:56-59.

Kawachi, I., Kennedy, B.P. y Glass, R. 1999. Social Capital and Self-Rated Health. A Contextual Analysis. *American Journal of Public Health* 89(8):1187-1193.

Kennedy, B.P et al. 1998. Social Capital, Income Inequality, and Firearm Crime. *Social Science and Medicine* 47(1):7-17.

Kimberly L., Kawachi, I. y Kennedy, B.P. 1999. Social Capital: A Guide to its Measurement. Health & Place 5:259-270.

Krishna, A. y Shrader, E. 1999. Social Capital Assessment Tool. Preparado para la Conferencia sobre Capital social y Reducción de la Pobreza. Banco Mundial, Washington DC, Junio 22- 24.

Kubisch, A. 1998. How Social capital is defined and operationalized in current social policy and antipoverty programs in the United States. In Moser, C. y Lister, S. (eds.) 1999. *Violence and Social Capital: Proceedings of the LCSES Seminar Series, 1997-98. LCR Sustainable Development Working Paper No. 5 – Urban Peace Program Series. The World Bank. Latin America and Caribbean Region. Environmentally and Socially Sustainable Development MSU.*

Leeder, S. y Dominello, A. 1999. Social Capital and its Relevance to Health and Family Policy. Australian and New Zealand Journal of Public Health 23(4):424-429.

Lewis, D.T. et al. 1987. Biopsychosocial Characteristics of Matches Samples of Delinquents and non-Delinquents. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry* 26(5):744-752.

Lomas, J. 1998. Social Capital and Health: Implications for Public Health and Epidemiology. Social Science & Medicine 47(9):1181-1188.

Londoño, J.L. 1998. Violence, Psyche and Social Capital. In Burki, S.J.; Aiyer, S.Y. y Hommes, R. (eds.), *Poverty and Inequality: Annual World Bank Conference on Development in Latin America and the Caribbean, 1996 proceedings, Banco Mundial, Washington, D.C., p. 71-82.*

Ministerio de Salud de Colombia. 1995. La carga de enfermedad en Colombia. Santafé de Bogotá, D C.

Moser, C. y Shrader, E. 1999. A Conceptual Framework for Violence Reduction. LCR Sustainable Development Working Paper No. 2 – Urban Peace Program Series. The World Bank. Latin America and Caribbean Region. Environmentally and Socially Sustainable Development MSU.

Moser, C. y van Bronkhorts, B. 1999. Youth Violence in Latin America and the Caribbean: Costs, Causes and Interventions. LCR Sustainable Development Working Paper No. 3 –

Urban Peace Program Series. The World Bank. Latin America and Caribbean Region. Environmentally and Socially Sustainable Development MSU.

Orpinas, P. 1999. Proyecto Activa: ¿Quién es violento? Factores asociados con comportamientos agresivos en ciudades seleccionadas de América Latina y España. OPS, Investigaciones en Salud Pública, Documentos Técnicos. Vol. 3.

Panamerican Health Organization. 1998. Health in the Americas: Volume II. Scientific Publication no. 569, Washington, D.C.

Pinheiro, P.S. 1993. Reflection on Urban Violence. The Urban Age. Vol.1, No.4.

Rubio, M. 1996. Crimen y Crecimiento en Colombia. In Interamerican Development Bank, Hacia un Enfoque Integrado del Desarrollo: Ética, Violencia y Seguridad Ciudadana, Encuentro de Reflexión. Washington. D.C.

Sampson, R.J., Raudenbush, S.W. y Earls, F. 1997. Neighborhoods and Violent Crime: A Multilevel Study of Collective Efficacy. Science 227:918-924.

Solimano, A. et al. 1999. Ensayos sobre Paz y Desarrollo; el caso de Colombia. The World Bank.

Sudarsky, J. 1997 Perspectivas para el Desarrollo del Capital social en Colombia. Coyuntura Social, Bogotá, Fedesarrollo Instituto SER, No.16.

Weaver, K. y Maddaleno, M. 1999. Youth Violence in Latin America: Current Situation and Violence Prevention Strategies. Revista Panamericana de Salud Pública; 5(4/5):338-343.

Wood, W., Wong, F.Y. y Chachere, J.G. 1991. Effects of Media Violence on Viewer's Aggression in Unconstrained Social Interaction. Psychological Bulletin 109(3):371-383.

Vélez, L., McAlister, A. y Hu, S. 1996. Measuring Attitudes Related to Violence in Colombia. Presentado al Journal of Social Psychology.

Yunes, J. y Rajas, D. 1993. Tendencia de la Mortalidad por Causas Violentas entre Adolescentes y Jóvenes de la Región de las Américas. OPS, Washington, D.C.